

DE LA RECUPERACIÓN DE TIERRA A LA
CONQUISTA DEL TERRITORIO

Fernando Pairicán Padilla

FERNANDO PAIRICÁN PADILLA

Académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Es posdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y director de la colección Pensamiento Mapuche de Pehuén Editores. Es autor de los libros *Malon. La rebelión del movimiento mapuche, 1990-2013* (2014) y *La biografía de Matías Catrileo* (2017). Sus áreas de intereses son la historia del siglo XIX y reciente, enfocada en el pueblo mapuche y su relación con el Estado chileno.

DE LA RECUPERACIÓN DE TIERRA A LA CONQUISTA DEL TERRITORIO

EN DEFENSA DE LA TIERRA

Las recuperaciones de tierras como aspiración por parte del pueblo mapuche comenzaron a principios del siglo XX. En la memoria de los sobrevivientes a la ocupación de La Araucanía, el despojo territorial no fue olvidado; de hecho, continuó entregándose como una narrativa generacional.

Con la fundación de la Sociedad Caupolicán Defensora de La Araucanía, en 1910, la memoria de la ocupación continuó presente, y la aspiración de recuperar las tierras por una vía política se comenzó a manifestar como resultado de la memoria de los sobrevivientes. De hecho, el mismo año en que se fundó la primera organización política del pueblo mapuche, la revolución agraria en México marcó el destino y las rutas políticas en torno a la cuestión de la tierra.

A las pocas décadas, los debates relacionados con la reforma agraria continuaron incrementándose con urgencia, con el propósito de insertar los campos a la producción capitalista. Frente a esa situación, el mundo indígena adquirió un nuevo ímpetu en la medida que especialistas, como arqueólogos y antropólogos, destinaron sus estudios a comprender a los pueblos preexistentes. La información que revelaron en relación con pueblos originarios como los mayas, q'chua, aymara y mapuche, confirma la persistencia de la producción agraria de los pueblos originarios, en específico de los Ayllu.

Algunos escritores, como el boliviano Fausto Reinaga y el peruano Carlos Mariátegui, pensaron una política revolucionaria producto de la persistencia del tejido comunitario de los pueblos originarios y sus modos de producción. También fue la óptica del historiador guatemalteco Severo Martínez, para quien la república construida a lo largo del siglo XIX fue la del mestizo al que denomina “criollo”.

Otros escritores, de carácter desarrollista, observaron los pueblos originarios—en específico en sus civilizaciones— como parte de la construcción identitaria de sus respectivas naciones. Algunos militares, como Jacobo Árbenz y el peruano Velasco Alvarado, con perspectiva desarrollista, fueron referentes al momento de usar al mundo indígena como símbolo de su construcción identitaria para dotarlas de un nacionalismo en un sentido de preexistentes y legados de las civilizaciones indígenas, como sucedió en Guatemala y Bolivia, donde las reformas agrarias marcaron el rumbo en los sucesivos años, siendo a su vez los epicentros regionales de la Guerra Fría.

En Chile, la reducción de tierras permitió la persistencia del tejido social pese a la ocupación de La Araucanía. El nuevo modo de producción, forjado en las primeras décadas del siglo XX, llevó al pueblo mapuche a experimentar por primera vez en su historia la concepción de “pobreza”.

Esta nueva realidad histórica puso al pueblo mapuche en una disyuntiva: vivir en Wallmapu o migrar a los centros urbanos. A partir de 1950, comenzó un éxodo de mapuche a las principales ciudades, en específico a Concepción, Valparaíso y Santiago. Es la capital la que recibe un número creciente de mapuche, los que se sitúan en las periferias de la ciudad, mientras los que viven en el territorio, entre medio de latifundios y haciendas de agricultores, resisten a nuevos tiempos de colonialismo.

Hacemos una distinción entre latifundio y hacienda. Producto de la construcción de Estado, las elites construyeron la nación según los periodos políticos de los gobiernos conservadores y liberales (1833-1861). Ambos desarrollaron “políticas indígenas”. En el caso de los primeros, fue a través de la entrega de tierras reconocidas por los Títulos de Merced a nombre del longko, en su mayoría aliados a los gobiernos chilenos.

Los gobiernos liberales también desarrollaron una “política indígena” que unió en su seno la conquista y la reducción. Estas últimas sellaron la historia del pueblo mapuche a futuro. Por un lado, se entregó un porcentaje de tierras para que los sobrevivientes de la invasión pudieran continuar viviendo con la esperanza de una incorporación sociocultural de los pueblos originarios; y para quienes se resistieron, se hizo uso de la fuerza del Ejército chileno, que diezmó a la población indígena. Como fue característico del siglo XIX, la represión y el consenso fueron los dos rostros del mismo proceso histórico. El resultado fue la reducción de tierras, espacios territoriales donde los mapuche podrían continuar viviendo en base a sus tradiciones y costumbres antiguas, junto con la esperanza de que fuesen las instituciones públicas, en específico las escuelas, vías de chilenización.

Hacia 1910, coincidiendo con el centenario de la república chilena, los mapuche fundaron la Sociedad Caupolicán Defensora de La Araucanía. Los personajes de la Guerra de Arauco enaltecidos por Alonso de Ercilla son usados como mística y ejemplo de resistencia a la conquista. Dentro de todos los protagonistas, la inmolación de Kallfülican fue el principal ejemplo de la ausencia de claudicación ante la adversidad.

Tres almas conviven con el propósito de impulsar una modernización técnica de los mapuche para insertarlos a la producción del capital del siglo XX. Una fue a través de la educación para mejorar los niveles de conocimiento y emprendimiento; otra, desarrolló las recuperaciones de tierras con el ideario de una república indígena para ese horizonte político. Usaron el concepto de raza como autoidentificación

para diferenciarse de los chilenos en torno a la idea de araucano como concepto estratégico, al cual sumaron las recuperaciones de tierras y el apoyo técnico a su producción para de ese modo revertir la pobreza, dejando a los mapuche en niveles complejos para su empoderamiento.

A nivel continental, las discusiones sobre la superación de la pobreza asociada a la reforma agraria y a un apoyo técnico para lo mismo vía industrialización, se convirtieron en la meta para los gobiernos de mediados del siglo XX. De hecho, luego de los cambios sucedidos a nivel global en la década del treinta, los gobiernos mesocráticos desarrollaron una modernización usando la historia de los pueblos originarios como parte de la fundación nacional. Esto se dio sobre todo en los gobiernos con presencia de las civilizaciones indígenas de América Latina, en específico en México, Guatemala, Bolivia y Perú.

En Chile se siguió en la perspectiva del modelo capitalista americano. Se reconoció a los mapuche bajo el concepto de araucano y se promovió su inserción al modo de producción capitalista intensificando el emprendimiento indígena. Para lograrlo, la renovación de los modos de producción capitalista en torno a la producción técnica agrícola buscó insertar a los pueblos originarios como base de la producción capitalista y suscribirlos a una dimensión agraria. Esas divergencias de aspectos derivaron en las disputas políticas hacia la década del sesenta.

A LA RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS USURPADAS

La revolución boliviana de 1952 marcó el ritmo de las reformas agrarias y la discusión de los pueblos originarios. Si bien el factor indígena se discutió, no fue asumido como actor central, determinando que, en un breve plazo, los debates entorno al rol autónomo de las poblaciones indígenas se desarrollara en pos de la conquista del poder político. Esa perspectiva se fue consolidando con los debates en relación a la situación indígena que a futuro se construirán en los convenios internacionales.

En esa misma línea podríamos sumar los acontecimientos derivados de la revolución agraria en Guatemala y las reformas políticas impulsadas por Árbenz, entre ellas, el Instituto de Lenguas de pueblos originarios. En Bolivia, la situación agraria en perspectiva indígena también fue considerada. Y en el caso mapuche, la Corporación Araucana a cargo del dirigente Venancio Coñuepán, quien logró convertirse en Ministro de Tierra y Colonización intentando desarrollar una política de emprendimiento técnico para el pueblo mapuche.

No obstante, la situación de la tierra continuó siendo una de las principales demandas de los pueblos originarios. El giro que da América Latina con el triunfo de la revolución cubana, impulsando la reforma agraria vía una insurrección armada, modificó nuevamente el escenario internacional.

La década de los sesenta, que coincide con la segunda etapa de la Guerra Fría, significó para los países del tercer mundo uno de los momentos más violentos, dentro del cual los pueblos originarios no estuvieron ausentes; la situación de la tierra y la superación de la pobreza continuaron presentes. Durante esos años, la persistencia de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios fue analizada por arqueólogos y antropólogos que se percataron de la permanencia de las formas de producción agrícola y cultural. La situación de la tierra pasó a ser vista como un tema de poder político, generándose nuevos debates en torno a esta materia, coincidiendo además con los procesos de descolonización de naciones árabes que impactan en algunos liderazgos indígenas.

LA LUCHA POR EL TERRITORIO

A partir de la década de los setenta, la disputa por el territorio fue comprendida como parte del poder político por los pueblos originarios. No es extraño que integrantes de los pueblos originarios apoyaran o adhirieran a los gobiernos que impulsaran las políticas de reforma agraria, pensando en el desarrollo de un bienestar económico y político. Sin embargo, con la insurrección del ciclo de guerrillas armadas, en específico con las tesis de los focos guerrilleros en zonas rurales, los pueblos originarios comenzaron a reflexionar sobre la insurrección como un método de acción para reconstruir las antiguas naciones originarias, una vez insertas en los ciclos de violencia del segundo periodo de la Guerra Fría.

Bolivia fue uno de los epicentros donde los aymara y q'chua comenzaron a reflexionar sobre la insurrección desde los indígenas, como camino a la conquista del poder. Coincide con las escrituras de algunos pensadores que forjaron un pensamiento ideológico, denominado "indianista" en el caso de Bolivia, por su autor, Fausto Reinaga, quien escribió un memorable libro: *La revolución india* (1970).

En el caso de Chile, el camino continuó centrado en una especie de indigenismo y paternalismo de Estado. Pero luego de la década de los sesenta, coincidiendo con la segunda etapa de la Guerra Fría y los procesos de descolonización en África y Medio Oriente, se continuaron profundizando las discusiones en base a la identidad y los nacionalismos. No obstante, para los pueblos originarios significó una de las etapas más violentas en sus territorios. Por un lado, al encontrarse en importantes niveles de pobreza, fueron vistos por los movimientos insurgentes de izquierda como parte de las fuerzas políticas para la transformación revolucionaria. Algunos lo intentaron, como el caso de Ernesto Guevara en Bolivia, pero la incomprensión de las dimensiones culturales y sobre todo las políticas contrainsurgentes aplicadas por los gobiernos aliados con los Estados Unidos, generaron una nueva fase de violencia en los territorios con alta presencia de pueblos originarios.

Las discusiones sobre el rol de los pueblos originarios en el escenario latinoamericano, así como las incomprensiones, continuaron su curso en este proceso. La reforma agraria, pese a no insertar a los pueblos originarios en el debate como pueblos distintos al campesino, volvió a imponer debates en relación con la situación de la tierra. Es interesante ver cómo, en este crucial contexto histórico sobre la recuperación de tierra, la situación se abrió hacia la obtención del territorio.

¿Cuál fue la diferencia? Bajo los tres años de la Unidad Popular, en las tierras con presencia indígena y bajo la construcción de poderes políticos que empoderaron a los sectores populares, la cuestión de la tierra retornó a la agenda de los pueblos originarios, pero se dio un giro sustantivo: los debates giraron en torno a la reconstrucción del territorio. Sin embargo, las políticas de empoderamiento económico que determinaron la reforma agraria y la tramitación de su normativa no lograron aplicarse por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, poniendo en suspenso y retroceso los avances políticos relacionados con dicha reforma.

La Unidad Popular fue una revolución, y como tal, aceleró los tiempos luego de las reformas políticas desarrolladas por el gobierno —en específico en el transcurso de 1971—, generando la reacción conservadora del año 1972 y la gestación de un poder político autónomo que cogobernó con el oficial solo detenido por el golpe de Estado.

En el transcurso de los mil días de la Unidad Popular, las pugnas entre una visión campesina y una renovación por territorio estuvieron presentes en sectores del pueblo mapuche. La situación no es extraña, las memorias continuaron presentes en el pasado post-ocupación, así como la pérdida de tierras al interior tanto de los Títulos de Merced como de la reducción. En el transcurso de las recuperaciones de tierras, el desarrollo de asentamientos y la coproducción económica agrícola y técnica permitió, en efecto, el emprendimiento de los mapuche que mejoraron sus niveles de vida.

Acompañó ese proceso la gestación de una normativa que se debatió y aprobó durante el gobierno, pero nunca se aplicó por el golpe de Estado. La Ley Indígena del gobierno de la Unidad Popular prometió un reconocimiento histórico, normativas para el mejoramiento económico y una renovación agrícola a partir de técnicas que generaron excedentes de producción. El proyecto de ley también puso acento en leyes debatidas para ese entonces en México, relacionadas con normativas indigenistas para el fomento de la identidad y el empoderamiento de los pueblos originarios.

Otro interesante debate abierto fue la cuestión de las naciones, a raíz de lo acaecido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El análisis de la situación indígena en torno a la autodeterminación fue recomendado por intelectuales como Alejandro Lipschutz. El golpe militar detuvo ese interesante

debate, que podría haber puesto a Chile a la par de lo que sucedió en México, Ecuador, Bolivia y Perú. La dictadura impulsó una renovación de la perspectiva clásica chilena del siglo XIX, en que los mapuche eran “araucanos” y “chilenos”. No había espacio para la diferencia, y continuando con su perspectiva militar ensalzó a los primeros guerreros contra la monarquía personificados en Leftarü y Kallfülkan y persiguió a quienes fueron activos partícipes de la reforma agraria, sobre todo a quienes participaron en los asentamientos que potenciaron el desarrollo económico.

Sin embargo, la dictadura unió muy bien la persecución con la repolitización para su refundación nacional. En 1978, comenzaron a desarrollar un proceso que desembocó en las reformas políticas de la reconstrucción del país. Para el caso mapuche, ese año se desarrollaron las políticas agrarias que permitieron la venta de tierras y el saneamiento de las tierras recuperadas durante la reforma agraria. Coincide con el triunfo al interior de la dictadura de los sectores inclinados al neoliberalismo, que posicionaron a la dictadura en un sentido proyectual en lo económico. A partir de ese año, se desarrolla la revolución neoliberal chilena, que significa para los mapuche un nuevo periodo de “chilenización” resistida con una nueva proyección como pueblo: la reconstrucción nacional mapuche.

LA TRANSICIÓN POLÍTICA: CAMINO A LA NACIÓN

Estas discusiones se elaboraron entre la experiencia de los asentamientos de la reforma agraria, las discusiones con los militantes en el exilio, los debates autonomistas a nivel internacional y la resistencia de la cultura tradicional. En 1978 se fundaron los Centros Culturales Mapuche con el propósito de empoderar a los mapuche bajo la percepción de las tradiciones y costumbres. Encubiertas bajo el concepto de “folclore”, la dictadura militar autorizó algunas prácticas tradicionales que los militantes mapuche usaron para resistir ante la neo chilenización. En 1981, a raíz de la institucionalización de la dictadura producto de las reformas políticas implementadas, Ad Mapu transitó de una organización con reivindicaciones culturales a una política con perspectivas autonomistas.

Dentro de las reivindicaciones políticas comenzó a surgir la cuestión de la tierra, englobada en el concepto de autonomía. Ad Mapu en 1984, de hecho, se vuelca a construir un proyecto de carácter histórico para el pueblo mapuche. Para lograrlo, recuperaron a las autoridades tradicionales (Longko, Machi y Werken), optando por modificar parte del repertorio político de la organización. Irrumpieron con mayor fuerza los sectores que desarrollaron experiencias de reforma agraria, englobándolas ahora en torno a los derechos de autonomía debatidos a nivel internacional con los pueblos originarios.

El Partido Comunista declaró a 1986 un año decisivo. La oposición apuró la crisis del régimen de Pinochet. En parte, la oposición se unificó en pos de ese objetivo, pero luego del atentado al dictador la división se hizo latente entre quienes se propusieron una salida pactada o una ruptura radical. El movimiento mapuche también lo hizo. Militantes de la organización fueron parte de la tesis de poner en crisis a la dictadura reiniciando las recuperaciones de tierras.

Las primeras recuperaciones tuvieron como epicentros algunos de los mismos territorios que fueron epicentros de la reforma agraria. Un nuevo ciclo de represión sobre el territorio mapuche provocó crítica por parte de la militancia más cercana a una salida negociada con la dictadura antes que a su derrocamiento. Un nuevo ciclo de coerción generó pugnas y debates al interior de Ad Mapu, generándose un quiebre al siguiente año, que aceleró también las críticas internas y pugnas ante la transición democrática. Entre 1987 y 1989 la organización dinamitó las diferencias internas frente a la salida propiciada por la vía del plebiscito. La crisis económica produjo una reacción que determinó la unificación de la oposición luego de un periodo de sistemática violación a los derechos humanos.

Articulados los mapuche en Ad Mapu, se sumaron al proceso de ruptura e hicieron un llamado a recuperar tierras con un nuevo arsenal político, basado en la concepción de autonomía. Este llamado coincide con un recambio generacional en los liderazgos y una transición desde el ala culturalista a una más ideológica, transición que a su vez determina una crisis al interior de la organización que se hizo visible en 1987, cuando la transición democrática comenzó a darse a través de una salida pactada ante el posible triunfo opositor en el plebiscito de 1988.

En el transcurso de esos años, la experiencia de la reforma agraria, en específico de los trabajos en los asentamientos, junto a las políticas públicas desarrolladas por algunos gobiernos latinoamericanos de matriz indigenista, más los debates en torno a la descolonización en los países árabes y la crisis de los socialismos reales, posicionaron la cuestión de la identidad como un tema político central de las postrimerías del siglo XX.

El retorno a la democracia coincidió con la crisis de los socialismos reales y la reactivación del nacionalismo de raigambres religiosas en algunas naciones. Para el caso de América Latina, el surgimiento de movimientos en un contexto de globalización y ascenso del neoliberalismo como modo de producción significó una nueva etapa de acumulación de riqueza.

Los territorios que vivieron la experiencia de la reforma agraria se tornaron emblemáticos luego de la rebelión de las comunidades. Lo novedoso fueron los nuevos componentes ideológicos que emanaron desde las intelectualidades comunitarias del movimiento mapuche, que unieron la experiencia de los asentamientos de la reforma agraria. Los conocimientos adquiridos en experiencias

internacionales como la coyuntura de la emergencia indígena en América Latina, permitieron la gestación de un pensamiento autonomista; en el plazo de una década, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) proclamó la liberación nacional como horizonte político.

El control territorial fue ideado por los comuneros y comuneras en las experiencias adquiridas en la resistencia mapuche como un camino a la autodeterminación “desde abajo”. Políticamente, significó una crítica a las experiencias gradualistas desarrolladas por algunos miembros del pueblo mapuche e indígenas. Esta vía política surgió como resultado de los Asentamientos Agrícolas desarrollados en el transcurso de la reforma agraria. La experiencia de administrar fue preservada como memoria de gestión y crecimiento económico.

Los avances gradualistas en América Latina en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) o el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, mostraron rutas alternativas para la conquista de los derechos colectivos de las naciones originarias. Ese camino, la autonomía vía plurinacionalidad, comenzó a ser plausible en el continente luego del año 2006.

Fueron años de euforia para las izquierdas del continente, pese a que algunos movimientos indígenas se mostraron críticos —por ser considerados bases de apoyo antes que conductores de un proceso político. La plurinacionalidad como alternativa fue ganando adeptos en los gobiernos del continente, aunque movimientos indígenas más críticos —como Pachakuti en Bolivia, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, la CAM y Aukiñ Wallmapu Ngulam (AWNg) en Chile y Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Argentina— mostraron profundas divergencias e inclusive críticas políticas a la plurinacionalidad por considerarla un obstáculo a la libre determinación.

Esas controversias se explican por la evolución del pensamiento nacionalista en los pueblos originarios, en específico en los sectores rupturistas del movimiento que han vivenciado el control territorial como un sendero hacia la libre determinación que contrasta con la plurinacionalidad. Lo interesante es que ambas vías políticas tal vez tengan su origen en las pugnas desarrolladas en el transcurso de los aciertos y desaciertos de la reforma agraria aplicada a nivel continental, corriente de la cual Wallmapu también ha sido un actor relevante.

REFERENCIAS

- BASTÍAS, J. (2016). *Memorias de la lucha campesina: Mapuches, mestizos y estudiantes*. Santiago: LOM Ediciones.
- CARVAJAL, A. (2010). *A desalambrear. Historias de mapuches y chilenos en la lucha por la tierra*. Santiago: Ayun.
- CORREA, M. (2010). *Las Razones del Ilkun/enojo. Memoria, despojo y criminalización en el territorio de Malleco*. Santiago: LOM Ediciones.
- CORREA, M., MOLINA, R. y YÁÑEZ, N. (2005). *La reforma agraria y las tierras mapuches: Chile 1962-1975*. Santiago: LOM Ediciones.
- FOERSTER, R. (2018). *¿Pactos de sumisión o actos de rebelión? Una aproximación histórica y antropológica a los mapuche de la costa de Arauco, Chile*. Santiago: Pehuén Editores.
- GAVILÁN, V. (2007). *La nación mapuche. Puelmapu ka Gulumapu*. Ayun.
- PAIRICAN, F. (2020). *Toqui. Guerra y tradición en el siglo XIX*. Santiago: Pehuén Editores.
- , F. (2014). *Malon. La rebelión del movimiento mapuche*. Santiago: Pehuén Editores.
- STERN, S. (1986). *Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española. Huamanga hasta 1640*. Madrid: Alianza Editorial.
- SUAZO, C. (2018). *¡Nadie nos trancará el paso! Contribución a la historia del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) en la provincia de Cautín, 1967-1973*. Santiago: Londres 38 Espacio de Memoria.
- THOMPSON, E. P. (2019) *Costumbres en Común*. Madrid: Ediciones Capitán Swing.
- URRUTIA, M. (2019). *El desalambre de los kuyfikeche. Una aproximación a las corridas de cerco en el Fundo Nebuentúe, 1971* [tesis de licenciatura, Universidad Santiago de Chile].
- WINN, P. (2013). *La revolución chilena*. Santiago: LOM Ediciones.